

al Ejecutivo á que se apartara de sendas perniciosas.

¿Sofaron? Quizás. ¿Les debemos hacer cargos? No. La sinceridad que pusieron en su obra, la honradez y rectitud de sus conciencias, la entereza con que arrojaron befas y escarnios, y hasta la hermesura de sus sueños, nos obligan á absolver. Lo justo fuera acusar á quienes, para beneficio de una patria, pretendieron establecer una perpetua y esplendorosa Democracia.

VI.

Arriaga constituyente, lleva al Congreso una gran ambición: la de servir á su patria; y un gran odio: la tiranía.

Logró lo primero desde su puesto de Presidente de la Comisión de Constitución, redactando artículos, apoyándolos con su palabra y su prestigio y su elocuencia, sembrando doctrinas que más tarde fructificaron.

Demostó lo segundo en diversas ocasiones. Basta recordar dos: cuando se trató del juicio político; cuando se trató de las comandancias generales; y digo que bastan esas dos, porque ellas resumen á maravilla todas las convicciones liberales de Arriaga, todos sus anhelos patrióticos, todas sus doctrinas políticas.

Debatíase el artículo 105.—“Están sujetos al juicio político por cualquier falta ó abuso cometido en el ejercicio de su encargo, los Secretarios del Despacho, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los Jueces de Circuito y Distrito y los demás funcionarios públicos de la Federación, cuyo nombramiento sea popular. El Presidente de la República está sujeto al mismo juicio por los propios delitos y por otros graves del orden común.”—Cerqueda oponía algunas restricciones, y el mismo Ocampo creía que se iba más allá de lo conveniente.

No opinaba lo mismo el ilustre potosino:

“Cree que en las repúblicas—dice Zarco—ningún funcionario debe ser inmune, y que por lo tanto la responsabilidad debe hacerse extensiva al Presidente y á los Ministros. De ningún modo parece justo que el primero quede impune por actos en que tiene parte. Para evitar debilidades y condescendencias, conviene someter á juicio al mismo jefe del Estado, y así cuando se sepa que toda falta importa responsabilidad, los gabinetes serán más compactos, habrá más unión entre los miembros del Gobierno y se seguirá una política mucho más franca. Encuentra muy difícil establecer un linde entre el Presidente y los Ministros para averiguar la responsabilidad de cada uno en los actos del Gobierno.

“Se ha dicho que sería indecoroso ver á los funcionarios sujetos á continuas acusaciones; pero mucho más indecoroso es que se les difame en corrillos y en tertulias, donde son víctimas de la calumnia, sin tener expedito el derecho de defensa, ni poder recurrir á los tribunales en justificación de su honor. Alude á algunos libelos y pasquines que se han dirigido al Presidente de la República, prodigando cobardes insultos al Gobierno.

“Aunque en las monarquías se declara que el rey es inviolable, no lo es en realidad, pues la opinión juzga hasta de los actos de su vida privada; pero en las repúblicas, ni como ficción es admisible la inviolabilidad del Jefe del Estado.

“La Comisión ha cuidado de establecer bastantes garantías en el juicio político, creando dos jurados, exigiendo para los fallos dos tercios de voto, y formando el de acusación de personas electas por todos los Estados, y que probablemente representarán todas las opiniones. No se quiere que el juicio político sea una arma de partido, y no puede esto decirse porque se temen disturbios y discordias, pues otro tanto se dirá de todo género de instituciones, cuando de todas puede apoderarse el espíritu de partido.

“Precisamente porque siempre hay quejas y acusaciones contra los gobernantes; precisamente porque eso produce inquietudes y zozobras que al fin se resuelven por rebeliones y pronunciamientos, es por lo que se necesita abrir una guía legal que evite gravísimos conflictos.”

García Granados, Moreno y Ruiz, rebaten, y Arriaga, firme en su opinión, persiste en que deben estar sujetos á juicio los funcionarios que emanen de la elección popular.

“El Sr. Arriaga, es Zarco quien habla—se había abstenido de dar una definición académica del juicio político—respuesta á Ruiz que decía no hallar bien definido ese mismo juicio político—por no ofender la ilustración del Congreso.”

Da lectura á algunos trozos de Tocqueville y después asienta que cualquier crimen, delito ó falta grave que cometa un funcionario en su cargo oficial, está sometido al juicio político.

“Si como cree el Sr. Ruiz, la impunidad de los funcionarios públicos no consistió antes en la ineficacia de los medios constitucionales, sino en la falta de valor civil y de espíritu público, no hay que temer que haya abundancia de acusaciones.

“Entra luego en extensas consideraciones sobre las ventajas del juicio político, siendo

la principal, la fácil remoción de los ministros impopulares.

El orador traza un cuadro *d'après nature*, aplicable á más de una época, de esos ministros que se adhieren á la cartera con el amor de la yedra al olivo, y que no la abandonan por grande, por patente que sea en su contra el fallo de la opinión, y pierden y extravían á los presidentes, y les ocultan la verdadera situación, y son ministros casi por capricho hasta que estalla una revolución.

“Se promete que los que no tengan limpia la conciencia, se retirarán al iniciarse el juicio político, sin esperar el resultado. Cuando las acusaciones sean infundadas, ellas no producirán el desprestigio de las autoridades, que ganarán, por el contrario, ante la opinión, cuando confundan á sus detractores.

“Si el artículo se declara sin lugar á votar, la comisión no sabrá qué hacer, porque no tiene conciencia para proponer el sistema antiguo que le parece de todo punto ineficaz.”

No se llegó á un acuerdo, no obstante que la Comisión modificó el artículo en estos términos:

“Están sujetos á juicio político por cualquier falta ó abuso grave cometido en el ejercicio de su encargo: el Presidente de la República, los Secretarios de Despacho; los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los jueces de Circuito y de Distrito, y los demás funcionarios públicos de la Federación, cuyo nombramiento sea popular.”

El artículo fué declarado sin lugar á votar: el principio quedó pendiente de conquista, y la comisión se vió precisada á reponer el juicio político que condensaba en un solo artículo, con la responsabilidad de los altos funcionarios, distribuida en ocho artículos que originaron no menos recias discusiones.

Veare ahora su actitud cuando se trató de las comandancias generales.

Una parte de la Comisión de Constitución proponía el siguiente artículo:

“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley arreglará el orden económico del ejército, teniendo por base la supresión de las comandancias generales.”

Sala de comisiones. México, Enero 21 de 1857.—Guzmán.—Cortes y Esparza.—Castillo Velasco.”

El Sr. Arriaga presentó el siguiente voto particular sobre el mismo asunto:

“Señor: El que suscribe se ha visto en la necesidad de formular el presente voto particular en cuanto á la segunda parte del artículo que la Comisión de Constitución somete

ahora al respetable juicio del soberano Congreso.

En mi humilde opinión, lo que propone la mayoría de la Comisión, no puede satisfacer las nobles y patrióticas miras de los señores diputados que propusieron la extinción de las comandancias generales.

Disponer solamente que “una ley arregle el orden económico del ejército, teniendo por base la extinción de las comandancias generales,” me parece que es aplazar una cuestión de tanta importancia, diciendo, como se ha dicho, al tratarse de las más especiales y radicales reformas: “que no es tiempo.....” Me parece que es dictar una prevención ambigua, puramente de nombre, y que fácilmente se podrá hacer ilusoria en todas sus consecuencias.

La ley, en efecto, suprimirá las que hoy se llaman las *comandancias generales*; pero establecerá ó podrá establecer otras que con diferente nombre tengan los mismos ó quizá peores vicios que las actuales.

Lo que en mi concepto han querido los señores de que se trata, es la abolición de esas comandancias fijas, perpetuas, inamovibles; (y una precisamente en cada Estado como empleo obligatorio, constituido é inherente á la demarcación política) comandancias que no han sido ni son más que rivales de las autoridades de los Estados, que toman parte muy directa en los asuntos civiles, políticos y administrativos; que deliberan y mandan, no ya en asuntos de justicia, sino también de hacienda, de paz y de seguridad pública; y que ejerciendo de hecho otras facultades y atribuciones que de derecho no pertenecen sino á las autoridades políticas ó civiles, ya sean de los Estados ó del gobierno federal; han dado margen á todas las querrelas y colisiones, á todas las disputas y discordias que tantas veces han perturbado, no solamente la buena armonía que debe reinar entre todos los funcionarios públicos, sino también el régimen legal y hasta la paz pública, haciendo que las leyes guarden silencio al estrépito de las armas. Y cuán fácil, y cuán peligrosa sea la tentación de abusar del poder militar, aun cuando esté moralizado, aun cuando esté movido por su verdadero espíritu de honor, de subordinación y de obediencia, no hay necesidad de comprobarlo con todas las desdichas de nuestro país, cuando las naciones más adelantadas en la civilización lo han juzgado casi incompatible con los elementos de la pacífica y verdadera libertad.

El que suscribe ha creído siempre, como cree ahora, que el poder militar debe ser enteramente pasivo, y así propuso desde hace muchos meses en el seno de la comisión un

artículo que fué desechado por la mayoría en los siguientes términos. "El poder militar en todo caso estará sometido á la autoridad civil." Cree también que ese poder no debe obrar, saliendo de su esfera, sino cuando la autoridad legítima invoque el auxilio de su fuerza; y que por lo mismo, sería inútil dictar un precepto constitucional sin más objeto que variar los nombres, dejando las cosas en el mismo estado peligroso que han tenido y tienen sobre esta materia.

Si han causado tantos males á la República esas comandancias generales que se tuvieron inherentes y necesarias á los Estados en términos de que en ningún Estado ha dejado de existir una de ellas con todas sus comandancias secundarias y accesorias, fué por que desgraciadamente reinó la preocupación de que el poder era la autoridad, de que la fuerza era la ley, de que los hechos constituían el derecho. No se comprende cómo podría conservarse la paz sin la intervención de las armas, independientes de la autoridad; cómo se podría cuidar de la seguridad personal y pública sin el amparo de los ejércitos permanentes; ni cómo se perseguirían los malhechores y se guardarían las cárceles sin esas guardias y esas escoltas perpetuamente residentes en las poblaciones recorriendo los caminos, todas obrando por sus propias inspiraciones, desviándose de su objeto, desconociendo que la autoiridad estaba en otra parte.

"La fuerza solamente se puede llamar derecho, cuando sirve para hacer prevalecer la voluntad de todos, manifestada por los órganos legales." "La fuerza, como el derecho, reside esencialmente en el pueblo." "Toda fuerza individual ó parcial es culpable cuando no es el instrumento de la voluntad general, cuando no compone una parte integrante de la fuerza social." Cuidar de la paz y de la seguridad pública, alimentar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos; en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones de la autoridad que obra á nombre de la ley; la ley es la expresión de la voluntad popular y los funcionarios populares nada tienen que hacer, por sí y ante sí, si no son requeridos, mandados ó autorizados por las potestades civiles, en todos los negocios que no tengan íntima y correcta conexión con la disciplina de obediencia que es su primitiva ley.

Y puede darse cosa más absurda en un sistema de gobierno pacífico y legal, que esa reunión contradictoria del poder civil y militar en una misma persona, erección monstruosa de la política mezquina del autor de todos nuestros males, del inolvidable dictador que quiso militarizar no solamente los

gobiernos de los Estados, sino los prefectos, los alcaldes y hasta los alcaldes? ¿Puede haber cosa más repugnante á la buena administración, que tal incoherente mezcla de poderes heterogéneos, que no se excluyen, que se repugnan, se chocan y contradicen? El gobierno pacífico y legal es uno; el gobierno guerrero y el mando económico de la fuerza, es otro. El primero obra invocando la ley. El segundo debe obrar sugerido por la autoridad.

Y por otra parte, es imposible, de todo punto imposible, que la autoridad política se moralice y recobre sus legítimos derechos, si ha de estar teniendo frecuentes ocasiones de entrar en comercio de condescendencias, debilidades y funestas consideraciones con el poder militar; y será también imposible, que el ejército se moralice si ha de residir en las poblaciones, viviendo en el ocio, distraiéndose de sus ejercicios, de sus academias, de los deberes de su profesión. Mucho tiene que aprender y que saber el buen soldado: mucho tiene que acostumbrarse á la vida del campamento, de la privación y de la fatiga, si quiere ser útil á la nación que le paga: mucho tiene que consumir en la instrucción, limpieza y cuidado de armas, evoluciones y ejercicios, estudio de las leyes de la guerra, y otros infinitos detalles de su economía y peculiar gobierno, para que pueda desperdiciar sus días en esa vida que hasta hoy han tenido nuestros veteranos. En esta parte es digna de todo elogio, y principalmente de imitación, la rigurosa observancia en que se halla el ejército permanente de la nación vecina. Nunca vive en contacto directo con los pueblos: jamás se ven esas rivalidades, esos celos de militar á paisano que son tan frecuentes entre nosotros. El soldado vive en campos, cuarteles, colonias ó recintos militares, separado de la gente civil, y vive con su familia, y se ocupa todo el día en los por menores de su profesión, se instruye en su oficio y no toma parte en lo que no le toca, si no es cuando se le manda. Difícil será que nuestro ejército llegue á este punto. Comprendo las gravísimas dificultades con que tendremos que luchar; pero me parece que siendo esta reforma de tanta importancia, intentarla es bastante.

Y conocida notoriamente esta importancia, no me es posible convenir con la mayoría de la comisión en que no sea punto constitucional. De buena voluntad prescindiría el que suscribe de muchos otros de los que no se han aprobado como tales, con tal de que se acordase éste que ha tenido tanta trascendencia en los males de que ha sido víctima la República. De acuerdo, pues, con la mayoría de la comisión en la primera parte del artículo que

VIII

establece que las autoridades militares no pueden ejercer otras atribuciones que las estrictamente relativas á la disciplina, propongo como segunda parte del artículo lo siguiente:

"Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión, ó en los campamentos, cuarteles ó depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de las tropas permanentes."

México, 22 de Enero de 1857. —Arriaga.

¿No es acreedor á perpetuo recuerdo un hombre así dotado de grandes virtudes cívicas y patrióticas y que con tanto acierto y energía las pone en práctica?

Su nombre, su gran nombre, perdurará entre nosotros, y cuando de entusiasmos vigorosos se hable; cuando se recuerde aquella inmortal lucha, todavía no bien apreciada en sus colosales proporciones; cuando con el pensamiento convertido á las tempestuosas sesiones se prueba en toda su magnitud la virilidad de los luchadores, la memoria del insigne portosino vendrá á nosotros é impondrá la admiración.

JOSÉ P. RIVERA

PABLO GARCÍA.

EL DISTINGUIDO escritor Gabriel González Mier ha sintetizado lo que podría decirse respecto de la infancia de Don Pablo García, en estas frases: "El Señor Licenciado Pablo García, hijo de Campeche, de humilísima representación, casi cero social por los antecedentes de familia, desconocido, oscuro como su rostro, último por su casta y por su clase, es en aquel Estado, el primero por su patriotismo, el primero por su amor á la democracia, y el primero, en fin, por su extraordinario talento."

Pablo García pertenece á la estirpe escogida de grandes hombres cuyas vidas de una unidad lógica y admirable, se desarrollan naturalmente y enérgicamente, como los acontecimientos sociales que de un modo fatal é ineludible presiden. Nada tiene de similar la existencia de hombres como García con la de aquellos políticos de circunstancias, sin principios, dispuestos á servir á todos los gobiernos, á vivir de todos los presupuestos y cuya fortuna es próspera á fuerza de ser oscura é insignificante; hombres que hacen de su propia nulidad su fuerza y de una repugnante y secreta baja-

za, los escalones para los más elevados puestos. García no es de aquellos hombres que se decretan su propia gloria, que castigan el olvido involuntario ó la omisión querida de rendir un homenaje por el que se siente repugnancia, ni es su gloria de esas sangrientas glorias formadas con la muerte y el asesinato de las que tanto abundan en los anales de nuestra Historia política y militar. La siguiente síntesis biográfica hará comprender cómo fué grande y cómo fué bueno el ciudadano Pablo García.

Siendo muy joven, en Febrero de 1843, fué nombrado sargento en una compañía de estudiantes que se organizó en Campeche, para la defensa de esta Plaza por el General Ampudia; la Compañía de colegiales tomó parte en una acción muy viva y sangrienta en la que fueron derrotados los invasores, y terminada la guerra volvió García á las aulas del Colegio clerical de San Miguel de Estrada, hoy Instituto Campechano, en donde se distinguió por su saber y su talento, recibiendo más tarde en Mérida el título de Licenciado en Leyes, de la Universidad de Yucatán.

En 1857 comenzó á figurar en el mayor me-